

## REPÚBLICA DE COLOMBIA



### RAMA JUDICIAL

#### TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN -

Medellín, veintiocho (28) de marzo dos mil veintitrés (2023)

Apelación auto

Exp.023-2018-00149

Vencido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la Sala Quinta de Decisión Laboral resuelve el recurso de apelación interpuesto por PROTECCIÓN S.A. contra el auto que resolvió las excepciones y declaró probada la excepción de prescripción propuesta dentro del proceso ejecutivo que adelantó en contra de la PRECOOPERATIVA DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES - PROTEC - EN LIQUIDACIÓN.

#### ANTECEDENTES:

El 10 de septiembre de 2018 el juzgado de conocimiento libró mandamiento de pago (Pág. 46-49 Archivo 000) por la suma de \$11.965.477 por concepto de capital de la obligación a cargo del empleador ejecutado por aportes en pensión obligatoria, por \$53.416.800 por intereses moratorios causados y no pagados hasta el 22 de noviembre de 2017, además de los que se causen desde la fecha de la expedición del título hasta el pago efectivo.

Luego de ser cumplida la gestión de notificación sin lograr la comparecencia personal de la ejecutada, designado Curador ad litem para su defensa, propuso las excepciones de inexistencia de las obligaciones reclamadas, enriquecimiento sin causa, mala fe de la demandante, pago, compensación, cobro de lo no debido, prescripción y buena fe.

En audiencia que se celebró el 15 de diciembre de 2022, el Juzgado de conocimiento DECLARÓ imprósperos los medios exceptivos propuestos por Protec en Liquidación, excepto la prescripción sobre la que dispuso su prosperidad por considerar que aun cuando los aportes son imprescriptibles son desde el punto de vista del ciudadano y no de las acciones propias de la administradora para buscar su cobro. Adujo que en este caso se está persiguiendo la cancelación de aportes causados entre 1996 y 2006, por lo que fue en este último año que puede entenderse surtida la exigibilidad, a partir de cuando contaba el Fondo con el término de tres años que disponen los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS, postura que acoge el Despacho en contraste a los cinco años que se ha dispuesto doctrinariamente acogiendo el Estatuto Tributario, por lo que al encontrar excedido tal tiempo para promover la acción de cobro, dio por configurado este fenómeno extintivo de la acción, con la salvedad dentro de la decisión que ello de ningún modo perjudica al afiliado, pues las consecuencias del cobro las asume el Fondo, quien por una gestión inoportuna debe garantizar el aporte del ciudadano.

Frente a la anterior determinación, la parte ejecutante en contra de quien se resolvieron las excepciones propuestas interpuso el recurso vertical, indicando que si bien la administradora es quien realiza las acciones de cobro, lo hace en representación de sus afiliados pudiéndose generar la deuda por muchas razones, sin que la prescripción de los aportes en materia de seguridad social exista. Advierte que al no tratarse de una prestación social no son aplicables las sanciones que contempla el Código Sustantivo de Trabajo y en ese orden, no es posible la eventual declaratoria de una prescripción del derecho con base a las normas allí dispuestas.

Explicó que los aportes son de naturaleza pública y están elevados a rango constitucional, sin que sea viable dar aplicación de normas analógicamente. En ese orden solicita la revocatoria de lo decidido para en su lugar declarar la improsperidad de esta excepción.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

### CONSIDERACIONES:

Sea lo primero aclarar que la providencia cuestionada, es susceptible de la alzada conforme a lo previsto en el numeral 9° del artículo 65 del CPTSS, según el cual, es apelable el auto que resuelva las excepciones en el proceso ejecutivo.

Pues bien, atendiendo los argumentos de la alzada, se tiene que con miras a determinar la viabilidad de la prescripción declarada, acude esta Sala en primera medida a lo que ha adocinado la Sala de Casación Laboral de nuestro órgano de cierre en cuanto a la imprescriptibilidad de los aportes al sistema de seguridad social en pensión, encaminado a que *“mientras el derecho se encuentre en formación, esto es, que el afiliado no haya cumplido los requisitos para acceder a la pensión de vejez, tal derecho no prescribe cuando hay mora en el pago por parte del empleador a las administradoras, por cuanto las cotizaciones son un elemento constitutivo de la pensión, de donde deviene que las administradoras quedan con toda la posibilidad de hacer valer aquellas acciones que la ley les permite y las obliga con el fin de recaudar, en nombre de sus afiliados, las cotizaciones que están en mora por parte del empleador que no las ha cancelado en tiempo”*, posición que ha sido plasmada para cuando el derecho de acción es ejercido por el trabajador, parte débil de la relación jurídica sustancial,

quien no puede verse afectado por la conducta patronal omisiva de sus obligaciones (Ver SL738-2018, SL1732-2022).

No obstante lo anterior, el panorama surge una modificación cuando se trata del ejercicio de acción que efectúa la administradora de pensiones, quien si bien actúa en representación de sus afiliados, tiene a su cargo el deber imperativo de administrar los recursos y velar por su recaudo y cobro de las cotizaciones en mora - Decreto 656 de 1994 y 1161 de 1994-, de cuyo cumplimiento se deriva la garantía de los derechos prestaciones que se causen en favor de sus titulares o beneficiarios.

Es por ese propósito, que el artículo 24 de la Ley 100 de 1993 autoriza el cobro de los aportes a las AFP por contar con las herramientas logísticas y jurídicas para advertir cuando un empleador incurre en mora y determinar el monto de la deuda, así como la constitución del título ejecutivo y elevación de la acción en oportunidad, escenario en el que si surge efectos la prescripción extintiva de conformidad con el artículo 54 de la Ley 383 de 1997, que establece *“las normas de procedimiento, sanciones, determinación, discusión y cobro contenidas en el libro quinto del estatuto tributario nacional, serán aplicables a la administración y control de las contribuciones y aportes inherentes a la nómina, tanto del sector privado como del sector público, establecidas en las leyes 58 de 1963, 27 de 1974, 21 de 1982, 89 de 1988 y 100 de 1993.”*

Y es que las cotizaciones al sistema pensional en voces del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional son parafiscales por cumplir con los rasgos de obligatoriedad, singularidad y destinación sectorial, ya que constituyen un gravamen impuesto en desarrollo de la soberanía fiscal del Estado que se cobra de manera obligatoria a un determinado número de personas para una destinación específica cual es satisfacer las necesidades en salud de esos afiliados, y por tanto, no pueden ser empleados para fines diferentes a la seguridad social, como expresamente lo señala el artículo 48 de la Carta Política, y tampoco están destinados a

engrosar las arcas del presupuesto Nacional (Ver C-243-2006, C422-2016 y C-349-2020 y sentencia con radicado 25000-23-27-000-2002-00422-01(16257), del 26 de marzo de 2009 y posteriormente en la radicada 08001-23-31-000-2009-00013-01(20711), del 19 de mayo de 2016), por lo que al establecerse como una modalidad de tributo, habilita acudir a las normas que regulan el procedimiento tributario cuando lo que se pretende es hacer efectivas unas cotizaciones o aportes dejados de cancelar por parte de empleadores morosos, estando definido en el artículo 817 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 86 de la Ley 788 de 2002 el término de prescripción de la acción de cobro para las obligaciones fiscales, delimitándolo en cinco años.

De ese modo, debe atenderse el compendio tributario para efectos de proceder con el cobro de aportes adeudados, cuyo límite temporal debe contarse a partir de la fecha en que los aportes patrono - laborales se hicieron legalmente exigibles, luego, al verificarse del detalle del título arribado para la presente ejecución (Págs. 10-27 Archivo 000) que las obligaciones que se pretenden hacer efectivas corresponden a ciclos sin pago entre los años 1996 y 2006, cuyo requerimiento persuasivo ocurrió el 04 de diciembre de 2017 (Págs. 12-12 Archivo 000), es que luce evidente el transcurso del lapso quinquenal que da lugar a que la acción de cobro se halle prescrita como bien lo definió el fallador de instancia, sin que bajo su postura trienal bajo el compendio sustantivo laboral modifique bajo razones de lógica la presente determinación.

Siendo lo anterior así, sobran consideraciones para concluir que el reparo planteado carece de sustento, de ahí que deba confirmarse el auto objeto de apelación.

Las costas de esta instancia, dado que el recurso no prosperó estarán a cargo de Protección S.A y en favor de la ejecutada. Como agencias en derecho se fija la suma de \$300.000.

### DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Quinta de Decisión Laboral, **CONFIRMA** el auto apelado de fecha y procedencia conocidas. Costas en esta instancia a cargo de Protección S.A. Se fijan como agencias en derecho en segundo grado la suma de \$300.000.

La presente decisión queda notificada en los **ESTADOS ELECTRÓNICOS**.

Los Magistrados,

  
CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES  
  
VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO  
  
SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE

Certifico: Que la sentencia anterior fue notificada por  
ESTADOS N° 054 fijados el 29 de marzo de 2023  
en la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

---

El Secretario.